El movimiento por la Justicia Ambiental en EE.UU.

Una breve historia

Michael K. Dorsey*

El movimiento por la Justicia Ambiental en los Estados Unidos representa una respuesta multiracial y multietnica frente al fracaso del movimiento ambientalista dominante, mayormente blanco, que no logra incluir la justicia social y económica en sus preocupaciones sobre el estado de la Naturaleza. Ya en 1972 Herbert Marcuse había advertido que el divorcio entre los temas de equidad o justicia social y los temas ambientales, dejaría al movimiento ambientalista a merced de «ataques efectivos aunque sin principios».1 El movimiento por la Justicia Ambiental ha nacido contra el «racismo ambiental», es decir, la «discriminación racial en la elaboración de la política ambiental y en la aplicación de leyes y reglamentos, el intento deliberado de colocar las instalaciones de residuos tóxicos o peligrosos en comunidades de gente de color, la aprobación oficial de la presencia de venenos y contaminantes que amenazan la vida en nuestras comunidades, y la historia de exclusión de la gente de color del liderazgo del movimiento ambientalista».2

El racismo ambiental también existe en la adjudicación de bienes públicos beneficiosos a las comunidades blancas (parques, piscinas, áreas recreativas), y en la promoción exclusiva de miembros blancos dentro de las organizaciones ambientalistas.

A pesar del racismo ambiental y contra el racismo ambiental, las minorías y la gente de color han creado un movimiento por la justicia ambiental para conseguir algo más amplio e ideológicamente más complejo que el ambientalismo tradicional, dominado por blancos. Quienes abogan por la justicia ambiental consideran que las cuestiones sociales, políticas, económicas y ecológicas están juntas y deben analizarse como un todo. El ambientalismo tradicional debe cambiar de dirección, para incluir esa orientación hacia la justicia social y económica del movimiento por la justicia ambiental. Este artículo estudia (brevemente) el movimiento por la justicia ambiental, quienes lo apoyan, quienes disienten de él. Sitúa este movimiento en el contexto del movimiento ambientalista amplio dominado por blancos; estudia las luchas multirraciales y multietnicas que han formado el movimiento;3 finalmente, considera el papel del movimiento por la justicia ambiental como agente de cambio social en Estados Unidos.

---


3 El movimiento por la justicia ambiental es uno de los primeros movimientos multirraciales y multietnicas importantes que se ha desarrollado en los Estados Unidos.
LA HERENCIA DEL RACISMO EN EL AMBIENTALISMO ESTADOUNIDENSE TRADICIONAL

El ambientalismo en los Estados Unidos ha estado dominado por organizaciones predominantemente blancas. Esta blanqueo es una herencia de los más tempranos días del movimiento verde. La blanqueo del movimiento verde nació de un racismo abierto que se convirtió en un racismo institucionalizado. Hace un siglo, era impensable que las minorías tuvieran acceso a los clubes de pesca y de caza que eran parte del primer movimiento por la conservación y preservación de la Naturaleza, precursor del ambientalismo actual. La organización más progresista, el Sierra Club de California, deliberadamente excluyó a negros y judíos y a otras minorías a través de una política de «adopción» de socios nuevos por socios antiguos, excluyendo a los no-blancos y no-cristianos. Los parques y zonas costeras públicas, conseguidas por las primeras campañas ambientalistas, prohibían el acceso por motivo de «raza».

A pesar de este profundo racismo social e institucional, los líderes y los escritores que representan el ambientalismo tradicional se han permitido opinar que las poblaciones minoritarias no se han interesado por las cuestiones ambientales. Hay dos grandes «teorías» al respecto. La primera es que la falta de preocupación ambiental se traduce en falta de presencia de las minorías en las organizaciones y en el movimiento ambientalista. La segunda es que, a pesar que pudiera existir preocupación ambiental, no hay presencia de las minorías en el ambientalismo por falta de «calificaciones sociales». La acción de las minorías en los temas ambientales estaría, pues, todavía por empezar en el seno del ambientalismo tradicional. Ambas «teorías» son falsas. Suponen que la composición del núcleo del movimiento ambientalista permanecerá sin grandes cambios y que, si los grupos que ahora no participan, quieren participar, tendrán que unirse a un movimiento idéntico o parecido al actual. «En otras palabras, la mayor parte de los costos de la adhesión, cooperación y construcción de coaliciones serán pagados por los que ahora no están en el movimiento, pues ellos deberán hacer los esfuerzos y ajustes necesarios para participar.»

Estas «teorías» tienen en cuenta las barreras sociales y económicas que han impedido la participación en el ambientalismo predominante, pero ocultan un hecho fundamental, a saber, la gente de color está profundamente implicada en cuestiones ambientales y lo ha estado históricamente. Al mismo tiempo, estas comunidades minoritarias han aprendido, de su contacto con el ambientalismo blanco, que para ellas era mejor la independencia.

POR LA JUSTICIA AMBIENTAL: UNA RESPUESTA MULTICULTURAL

Las luchas ambientalistas en las comunidades minoritarias tienen sus raíces en las luchas de Martin Luther King Jr., de...

---

6 Snow, op. cit. p. 78. Muchas secciones del Sierra Club mantuvieron estatus de avanzados los años 1980.
8 Snow, op. cit. p. 79.
10 Snow, op. cit., p. 85. Recuerdo vivamente, en una excursión en el Parque Nacional Adirondack, la estupefacción de una guardia del parque por el hecho que yo soy negro y estaba solo. Los únicos ecologistas negros que había visto pertenecían a grupos de derincuentes en rehabilitación. Más significativa es la pauta de votaciones del grupo de parlamentarios negros (Congressional Black Caucus) que, según la estadística elaborada por la Liga de Votantes Conservacionistas desde 1970, «muestra un apoyo para los temas conservacionistas mayor que ningún otro grupo político, y también mayor que cualquier otra muestra regional de ciudadanos, incluida California». Véase Henry V. Davis, «The Environmental Voting Record of the Congressional Black Caucus», en Bryant y Mohai, eds., Race and the Incidence of Environmental Hazards, op. cit.
11 Snow, op. cit., p. 93.
César Chávez y otros activistas de los derechos civiles, laborales y humanos. Chávez, por ejemplo, cuando dirigió la United Farmworkers Union (UFW), el sindicato de obreros agrícolas, defendió los derechos de los obreros agrícolas inmigrantes y trató de protegerlos de las aplicaciones de DDT, un pesticida que destruiría sus vidas. La UFW en 1968, aliada a la California Rural Legal Assistance (CRLA), incorporó al Environmental Defense Fund (EDF) en su intento de prohibir el DDT, combinando las preocupaciones sobre la pérdida de vida silvestre, muerte de pájaros, etc. con la preocupación por la salud en el trabajo.\(^{12}\) Por desgracia, la alianza UFW-CRLA-EDF fue meramente un matrimonio de conveniencia, según el propio Charles Wurster, científico y co-fundador del EDF.\(^{13}\) También en 1968, el reverendo Martin Luther King Jr. fue a Memphis en Tennessee (su último viaje antes de ser asesinado), en lo que hoy llamamos una misión de justicia ambiental: mejorar las condiciones de trabajo y de remuneración para trabajadores afroamericanos de las basuras municipales.\(^{14}\) La historia del activismo ambiental en las comunidades de color es una historia que se basa sobre todo en la exigencia de derechos civiles para conseguir la justicia social y económica. Esas luchas no comparten los símbolos comunes del ambientalismo dominante tradicional: los grandes animales exóticos, los espacios naturales verdes, o la amenaza de cáncer de piel por la radiación ultravioleta al disminuir la capa de ozono.

A principios de los años 1980, un movimiento por la justicia ambiental empezó a surgir en los Estados Unidos en las organizaciones de derechos civiles y se convirtió en una parte explícita del orden del día y de las campañas públicas de multitud de organizaciones de base. Este movimiento llamó mucho la atención al combinar las luchas acerca de los recursos naturales o la contaminación ambiental con las luchas por el cambio social en las comunidades minoritarias.\(^{15}\)

El primer episodio que llamó la atención nacional sobre el racismo y la injusticia ambiental ocurrió en Warren County, Carolina del Norte, en 1982.\(^{16}\) Los funcionarios de la administración del estado decidieron localizar un vertedero de PCB en el condado de Warren, predominantemente negro.\(^{17}\) Las protestas contra el vertedero fueron dirigidas por residentes locales en cooperación con una amplia alianza de grupos de derechos civiles, incluida la comisión de justicia racial de la United Church of Christ (UCC-CRC), la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) y el Congressional Black Caucus, de parlamentarios negros. Las manifestaciones culminaron en un intento de impedir que los camiones cargados con residuos con PCB (bifenilos policlorados) entraran en el vertedero. Más de 500 manifestantes fueron arrestados, muchos de ellos activistas de derechos humanos, o políticos conocidos como Joseph Lowery, antiguo compañero de Martin Luther King y director de la SCLC, y el delegado congresista (demócrata, del distrito de Columbia) Walter Fauntroy. Al final, las manifestaciones contra el «Vertedero de Hump» (así llamado en «honor» del gobernador de Carolina del Norte que lo había autorizado), fracasaron, pero sirvieron para poner de manifiesto la participación y liderazgo de afroamericanos locales en una cuestión ambiental. La lucha de Warren County destruyó dos mitos a la vez: que las comunidades minoritarias no se interesan por el medio ambiente y que las organizaciones o individuos de esas comunidades no tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para ser ambientalistas. Se abrieron nuevas perspectivas para la protesta ambiental desde grupos de base, muy distintos al habitual lobbying de las organizaciones ambientalistas blancas en Washington.\(^{18}\)


17 El Censo de Estados Unidos de 1990 da al condado de Warren una población de 16,232 personas, de las cuales 80 por ciento eran negras, y de éstas el 80 por ciento por debajo de la línea de pobreza.

18 Gottlieb, Facing the Spring, op. cit. p. 264.
El delegado congresional Walter Fauntroy, que había sido arrestado en Warren County, regresó a Washington D.C. y pidió a la General Accounting Office del gobierno de Estados Unidos que «determinara la correlación entre la localización de vertederos de residuos peligrosos y el estatus racial y económico de las comunidades vecinas, en la región IV de la Environmental Protection Agency». La Oficina concluyó que «los negros constituyen la mayoría de la población en tres de las cuatro comunidades donde hay un vertedero de residuos peligrosos en la región IV de la EPA». Aunque desgraciadamente una década después ese desequilibrio todavía no ha sido solucionado, esa conclusión de la General Accounting Office tuvo afortunadamente un gran impacto ya que se convirtió en la base de un informe de ámbito nacional auspiciado por la UCC-RJ sobre las características raciales y socioeconómicas de las comunidades amenazadas por residuos peligrosos.

El informe de la UCC-RJ señaló que para explicar la localización de los vertederos comerciales de residuos peligrosos, la raza era estadísticamente la variable más significativa de todas las variables consideradas. Las comunidades con vertederos de residuos peligrosos tenían mayor proporción de residentes negros, y tres de cada cinco negros o hispánicos vivían en comunidades con vertederos no controlados. Esos resultados llevaron al director de la UCC-RJ, Ben Chavis, a usar el término de «racismo ambiental» para caracterizar la localización de los residuos.

Los estudios de la General Accounting Office y de la UCC-RJ permitieron plantear una premisa muy polémica: que la composición racial era el dato que mejor permitía predecir la localización de los residuos peligrosos en los Estados Unidos. Otros investigaciones sobre el racismo ambiental fueron emprendidas, y surgieron críticas de su metodología y de sus conclusiones. Los críticos, a menudo académicos que contaban con apoyo de la industria química, discutieron la definición de «comunidad», señalaron que la proximidad a un vertedero o instalación de tratamiento de residuos peligrosos no se correlacionaba necesariamente con el riesgo, advirtieron que, en el momento de la selección de los lugares escogidos, no podía demostrarse que esos lugares fueran más pobres o con mayor proporción de minorías, y afirmaron también que la proporción de residentes pertenecientes a minorías o de bajos ingresos en una comunidad determinada no era un dato suficiente para saber qué parte de esa población podría realmente sufrir un daño ambiental.

Ante esas críticas, el informe UCC-RJ fue reexaminado en 1994, usando informaciones recientes. Goldman y Firton hallaron que los impactos identificados por primera vez en 1987 habían empeorado. En su estudio, concluyeron que entre 1980 y 1993 la concentración de residentes que pertenecían a minorías en comunidades con vertederos comercia-

---

20 Ibid., p. 1.
23 Ibid.
les de residuos peligrosos había aumentado de 25 por ciento a casi 31 por ciento, y que las minorías tenían una probabilidad de vivir cerca de un vertedero de residuos peligrosos que era 47 por ciento mayor que la de los blancos.

La protesta del condado de Warren y ese trabajo empírico posterior ayudaron a galvanizar un movimiento de base por la justicia ambiental en toda la nación. Al igual que en Warren County, muchas de esas luchas eran protagonizadas por afroamericanos. Por ejemplo, en los barrios del sur de Chicago, Hazel Johnson describía así la comunidad afroamericana en donde ella reside: «Vivo en un barrio que fue edificado sobre un vertedero. Nuestra área ha sido un vertedero durante 163 años. Es todo tóxico. Tenemos siete vertederos, una depuradora, la fábrica de la Ford, una fábrica de pinturas, varias empresas químicas, y siderurgias. El Calumet (un río que sirve de desagüe para la siderurgia) pasa aquí cerca. Está tan contaminado que haría falta 75 años para descontaminarlo, si realmente pueden hacerlo. Tenemos tres esquinas que emiten 30.000 toneladas de venenos al aire cada año. También tenemos asbesto en nuestros apartamentos».

Después del incidente de Love Canal [en los años 1970], Johnson empezó a pensar si también en su zona habría una conexión entre industria pesada, fuentes de contaminación, y los problemas de salud tan corrientes en su comunidad, que lleva el nombre de Altgeld Gardens. Cuando una hija suya estaba encinta de cinco meses, «los médicos descubrieron que el bebé no tenía cabeza ni espalda», y tuvo que abortar. Este incidente hizo que Johnson preguntara a otros residentes de Altgeld Gardens sobre su salud. Los resultados fueron alarmantes. «Muchos vecinos tenían enfermedades serias, y más del 95 por ciento se quejaba de problemas respiratorios, de irritaciones en la piel y en los ojos, pero no eran simples irritaciones, eran muy severas, especialmente en los niños. Un vecino tenía un hijo de ocho años que usaba un inhalador para respirar, todos los días».

Johnson y otros miembros de la comunidad formaron People for Community Recovery, una organización ambientalista que en 1982 era la única en todo el país cuyo domicilio oficial estaba en un barrio de viviendas de propiedad pública. Esta organización ha crecido mucho y hoy tiene más de mil residentes como miembros. En junio de 1996 auspiciaron la primera cumbre regional de Justicia Ambiental en el Midwest con la idea de juntar a más de 400 representantes de organizaciones para ponerse de acuerdo en una estrategia regional de justicia ambiental.

Analogamente a lo sucedido en Altgeld Gardens en Chicago, las y los afroamericanos de Harlem en Nueva York en 1988 fundaron la West Harlem Environmental Action (WHEACT). Esa organización trató de educar y movilizar a los residentes de Harlem para lograr mejoras en la situación de contaminación del aire y del agua, uso de la tierra y espacios públicos, residuos tóxicos, transporte, patrimonio histórico y justicia ambiental en general. Según Vernice Miller, quien fundó esta organización, WHEACT empezó a existir porque vimos que estábamos albergando una cantidad desproporcionada de instalaciones municipales, de incineradoras y de plantas de depuración de efluentes. WHEACT ha tratado de expandir su acción para abarcar también a las comunidades latinas e hispánicas de Harlem, y para proponer planes de desarrollo social y económico.

WHEACT, de Harlem en Nueva York, y People for Community Recovery de Altgeld Gardens en Chicago, simbolizan las luchas de las comunidades afroamericanas para conseguir la justicia ambiental, pero hay otros participantes en esas luchas además de las comunidades afroamericanas. Son las luchas...
El movimiento por la Justicia Ambiental en EE.UU.

multirraciales, multiculturales y multietnicas. Así, la Red del Sudoeste por la Justicia Económica y Ambiental (SNEEJ, Southern Network for Economic and Environmental Justice) con sede en Albuquerque, Nuevo México, se fundó en 1989 y coordina a organizaciones [de americanos nativos, de mexicanos-americanos y otras] de ocho estados.\textsuperscript{39} Richard Moore, uno de los co-directores, explica: «No sólo registramos a los voluntaries, les estimulamos a votar. También hacemos manifestaciones, marchas, reuniones de la comunidad y reuniones con representantes oficiales. Hacemos de todo, y da frutos».

SNEEJ hace lobbying, investiga, organiza, educa y emprende acciones directas con respecto a muchas cuestiones ambientales en comunidades de color en todo el Sudoeste.

Precisamente, esta Red (SNEEJ) inició la acción para cambiar drásticamente la manera de operar de las organizaciones ambientalistas blancas que son las más poderosas, las Díez Grandes o como ahora se las llama, el Grupo Verde. En 1990 la SNEEJ y más de cien activistas latinos, afroamericanos y nativoamericanos enviaron una serie de cartas a esas organizaciones predominantes, argumentando que el «racismo y la blancura del movimiento ambientalista» de Estados Unidos se había convertido en su talón de Aquiles,\textsuperscript{40} y quejándose de la falta de responsabilidad de ese movimiento frente a las comunidades minoritarias en Estados Unidos y frente a las comunidades (mayoritarias) del Tercer Mundo. Además, las cartas mencionaban las prácticas habituales de reclutamiento de personal en las Díez Grandes organizaciones ambientalistas como muestra de racismo, ya que no había apenas gente de color en posiciones de influencia y liderazgo. Según Richard Moore, «las cartas eran realmente acerca de quién tenía poder en el movimiento ambientalista y cómo iba a ser usado».

El desafío directo a las organizaciones ambientalistas dominantes, y la creciente evidencia de la relación causal entre composición racial y localización de peligros ambientales (que se llamó «racismo ambiental»), llevó a que una coalición multirracial planeara la Primera Conferencia Cumbre Nacional de Líderes Ambientales de Gente de Color en Washington D.C. entre el 26 y el 27 de octubre de 1991.\textsuperscript{41} La cumbre tenía como objetivo explícito «cambiar los términos del debate sobre la naturaleza del movimiento ambientalista»,\textsuperscript{42} y «facilitar a los líderes de gente de color un proceso continuo de reforzamiento de las organizaciones y comunidades nacionales, regionales y locales que están implicadas en conflictos por la justicia ambiental; dar una oportunidad para iniciar el diálogo entre líderes de gente de color y los dirigentes [blancos] de las organizaciones ambientalistas nacionales; identificar cuestiones centrales de la política ambiental desde la perspectiva de los líderes de gente de color; y tener un impacto en el proceso de toma de decisiones públicas en interés de la justicia ambiental a niveles federal, estatal y municipal».

Un resultado de esa cumbre de 1991 fueron los Principios de la Justicia Ambiental. Este documento que representan el esfuerzo acumulado de tres días de conferencia detalla las tareas de las comunidades de gente de color que intenran salvar a sus miembros de la destrucción ambiental. El prefáctulo a los Principios indica que la cumbre fue un intento de «crear un movimiento nacional e internacional de todas las gentes de color para luchar contra la destrucción y contra la apropiación ajena de nuestras tierras y comunidades».

La cumbre dio a la gente de color, a los líderes de las bases y a los activistas un espacio verdaderamente propio. Esta gran reunión fue la primera ocasión en que grupos comunitarios y...
redes regionales diversas de América del Norte, de Puerto Rico y de las islas Marshall, se reunieron a través de sus representantes para enfrentar la injusticia ambiental y el racismo ambiental, dando la oportunidad a más de 300 representantes de compartir sus ideas, sus éxitos y sus campañas y estrategias para poner freno a la industria contaminadora y para obtener apoyo de los gobiernos.

**LOS OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL**

La conferencia en la cumbre de 1991 mostró para siempre más que un movimiento ambientalista multirracial era posible. Los grupos de justicia ambiental dirigidos por líderes de minorías han intentado lograr cambios en tres instituciones: 1) las organizaciones ambientalistas tradicionales, bajo dominio blanco; 2) el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo la Agencia de Protección Ambiental (EPA); y 3) las compañías transnacionales contaminadoras, especialmente las que manejan residuos y las que tienen un pasado contaminador.

1) Los Grupos u Organizaciones Verdes.- Tras las cartas enviadas por la SNEEJ, las organizaciones ambientalistas dominantes, las Diez Grandes, empezaron a responder, prometiendo contratar a más personal perteneciente a minorías e incluir en sus agendas de problemas ambientales algunos de particular interés para las comunidades de gente de color; el envenenamiento por plomo; la carga desproporcionada de riesgos por residuos peligrosos, pesticidas y otros tóxicos; y la herencia de los residuos nucleares que afecta especialmente a comunidades de americanos nativos. Pero las Diez Grandes no añadieron a esos nuevos programas de justicia ambiental si se introdujeron, un cambio institucional interno. Por ejemplo, la National Wildlife Federation (NWF) se negó abiertamente a dar explicaciones sobre la ausencia de personas pertenecientes a minorías en los puestos de dirección, con la excusa dada por su director ejecutivo que «todo el mundo es profesional, los que descargan los camiones en el almacén y los abogados que van a la Corte Suprema a defender nuestras posiciones». Esta misma organización, la NWF, como también la National Audubon Society, aunque decían defender la Justicia Ambiental, tenían en sus consejos de dirección a representantes de algunas de las compañías contaminadoras del país. Así pues, a pesar de la nueva teórica, de los modestos esfuerzos por contratar otro personal, de las esporádicas actividades de apoyo a grupos comunitarios minoritarios, y de la ampliación de sus agendas, las organizaciones predominantes continuaron atrapadas en el terreno y en los tipos de acciones que las separan de la nueva política ambientalista influida por la raza, la etnicidad, el género y la clase social.

2) Moviendo al Estado.- Los promotores de la justicia ambiental han logrado algunos cambios en los organismos del gobierno y en sus políticas. Al empezar, los esfuerzos se
dirigieron a la EPA. En 1990, antes de la conferencia en la cumbre de 1991, una coalición de académicos, investigadores y activistas de la base, se reunieron en la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan. Este grupo que se llamó la Coalición de Michigan envió un memorándum a la EPA, al Departamento de Salud Pública y al Consejo de Calidad Ambiental, con copias a los gobernadores de los 50 Estados, a diversos legisladores y a los parlamentarios negros y latinos (agrupados en sus Congressional Caucuses), solicitando que la EPA y los otros organismos gubernamentales se comprometieran a «emprender investigaciones para avanzar en el conocimiento de los riesgos ambientales en comunidades de minorías o de bajos ingresos; iniciar proyectos para aumentar la conciencia y la comunicación de riesgos a minorías o grupos de bajos ingresos; requerir que las consideraciones de equidad racial y socioeconómica fueran incluidas en los estudios de impacto ambiental reglamentarios; asegurar que los estudios geográficos actuales y futuros de riesgo ambiental contengan también la dimensión racial y socioeconómica; aumentar la capacidad de los colegios y universidades históricas negras y de otras instituciones minoritarias para participar en el desarrollo de la equidad ambiental; nombrar asistentes especiales para la equidad ambiental con capacidad de decisión en esos organismos del gobierno; y hacer una declaración pública sobre la política de equidad ambiental.»

La EPA se demoró en contestar. El administrador de la EPA, republicano, creó un grupo de estudio de la equidad ambiental, para considerar las demandas de la Coalición de Michigan, y tras dos años de deliberaciones la EPA publicó un informe en dos volúmenes: «La equidad ambiental: reducir el riesgo en todas las comunidades.» La publicación del informe desembocó en una polémica porque se filtró al mismo tiempo un memorándum interno en el cual algunos funcionarios de la EPA describían el movimiento por la justicia ambiental como «pélergico» y «amenazador», «una de las cuestiones ambientales más explosivas por aparecer». La EPA debía actuar antes que la cuestión de la justicia hacia las minorías llegara al punto de inflación, aquel momento en una controversia pública emocionalmente intensa en que los grupos activistas finalmente persuadieron a los grupos más sólidos e influyentes (organizaciones de derechos civiles, sindicatos, iglesias) para que acusen irresponsablemente».

A pesar del escepticismo reaccionario de la EPA, la Coalición de Michigan influyó con éxito sobre ella para que creara la Oficina de Equidad Ambiental dentro de la propia EPA, inaugurada en 1992: un reconocimiento oficial al trabajo empírico que mostraba que la composición racial de las comunidades estaba correlacionada con los daños ambientales. La mera existencia de esta Oficina ayudó a legitimar al movimiento de justicia ambiental y a sus promotores, aunque no pueda decirse que la EPA esté verdaderamente comprometida en hacer frente al racismo ambiental y en promover la justicia ambiental dentro del gobierno. La Oficina de Equidad Ambiental, con un presupuesto minúsculo, no es una institución investigadora o política de vanguardia.

La administración de Clinton intentó mostrar su compromiso con el movimiento de justicia ambiental diciendo la Orden Ejecutiva 12898 de 11 de febrero de 1994. Esta Orden exige que todas las agencias del gobierno federal desarrollen una estrategia de justicia ambiental que «identifique y haga frente a los efectos de sus programas, políticas o actividades, desproporcionadamente altos y adversos para la salud de las minorías, los grupos de bajos ingresos y las comunidades de bajos ingresos». La EPA, por otra parte, prometió reducir el riesgo asociado con la contaminación en las comunidades de bajos ingresos, haciendo un plan para reducir la exposición a los contaminantes, y comenzó a implementar una serie de medidas para mejorar la justicia ambiental.

Ferris, op. cit. en la nota 47.
Bryant y Mohal, op. cit. en nota 10, pp. 4-5.
Hay que notar que Reilly, Indignado de que se hablara de «racismo ambiental» en la EPA, prefirió usar «equidad ambiental». Véase William Reilly, «Environmental Equity: EPA’s Position», EPA Journal 16(1) marzo-abril 1982. La Coalición de Michigan también que esa cambio de nombre implicara la negativa a admitir la evidencia estadística de que la composición racial era un indicador de impactos ambientales. Se informe de la EPA conoció que faltaban datos acerca de los efectos sobre el ambiente y la salud según la raza y el ingreso. Además, «equidad ambiental» era una expresión que no comprometía a remediar las situaciones sino simplemente a una «distribución equitativa de la contaminación».
La Oficina de Equidad Ambiental cambió de nombre en 1993 y ahora se llama la Oficina de Justicia Ambiental.
lud humana o el ambiente de las poblaciones minoritarias o de las poblaciones de bajos ingresos». En un memorándum publicado el mismo día que la Orden Ejecutiva, el Presidente hizo notar que la Orden tiene por objeto dirigir «la atención federal a las condiciones ambientales y de salud humana de las comunidades minoritarias y de las comunidades de bajos ingresos con el fin de lograr la justicia ambiental». Al reconocer la existencia de la injusticia ambiental, Clinton quiso alinearse al movimiento pero la Orden tiene un último párrafo que revela la debilidad de esa alianza y la ambivalencia de la administración demócrata, similar a la ambivalencia republicana: «Esta Orden sólo pretende mejorar la administración interna de la rama ejecutiva y no crea ningún derecho, beneficiario, responsabilidad sustantiva o de procedimiento, que pueda argüirse en la ley o en equidad por alguien contra los Estados Unidos, sus agencias, sus funcionarios o cualquier persona». Así pues, puede cuestionarse cuál es la posición auténtica de la administración de Clinton frente a la justicia ambiental.

3) El poder de las empresas.- Una de las razones que explican por qué los incidentes de contaminación ocurren en comunidades minoritarias y de bajos ingresos más que en otras, es que esas comunidades presentan menor resistencia a la industria contaminadora. Así, Cerrell Asociados, una consultora privada del Estado de California, aconsejó a la Junta de Gestión de Residuos de California en 1984 que las plantas para quemar basuras y producir energía fueran colocadas en áreas donde fuera menos probable que hubiera oposición, incluyendo comunidades con predominio de minorías, de personas mayores, de bajos ingresos y católicas. Los grupos socioeconómicos medios y altos poseen más y tal vez mejores recursos para oponerse a las amenazas de contaminación. El movimiento de justicia ambiental se ha opuesto muchas veces a que se localicen residuos peligrosos en comunidades de minorías, pero la práctica continúa. Además, es realmente alarmante que, cuando el gobierno federal exige la limpieza de sitios contaminados y cobra las multas, suele hacerlo en áreas de comunidades blancas más que en áreas de comunidades minoritarias. Lavelle y Coy han mostrado que las multas judiciales por infracciones a la ley que regula los incidentes de contaminación —la Resource Conservation and Recovery Act— varían más del 500 por ciento según la composición racial aunque menos del 2 por ciento si se tiene en cuenta el ingreso. Las comunidades minoritarias están amenazadas de un doble peligro: carecen de recursos para luchar por sí mismas contra la localización de residuos, y no tienen suficiente protección del gobierno contra la contaminación.

La cuestión se complica todavía más porque la puerta entre las industrias contaminadoras (o las industrias que vienen de la contaminación) y la EPA se cierra y se abre con facilidad. Los representantes de las industrias contaminadoras frecuentemente dejan sus altos puestos en sus empresas para trabajar en altos puestos en la EPA. En algunos casos los consejos directivos de los grupos ambientalistas dominantes comparten miembros con los consejos directivos de empresas contaminantes. Cuatro directores de la EPA han sido miembros de los consejos directivos de empresas contaminantes o que venían de la contaminación. William Ruckelshaus, director de la EPA desde 1971 a 1973 y de 1983 a 1985, fue miembro del consejo directivo de Monsanto y de Browning-Ferris, Inc. (BFI). BFI es la segunda compañía de gestión de residuos no-peligrosos del país. Walter Barber, administrador de la EPA en 1981, fue, antes de ir a la EPA, vice-presidente de la mayor compañía de gestión de residuos peligrosos, Chemical Waste Management Inc. Douglas Costle, ex-administrador de la EPA, y Lee Thomas, sub-administrador, han tenido puestos respectivamente como presidente y principal ejecutivo de diversas empresas de residuos peligrosos.
El movimiento de justicia ambiental ha tratado de hacer frente a las industrias contaminantes de diversas maneras. El movimiento ha exigido una política de NIAMBY (No in Anyone’s Backyard, no en el patio trasero de nadie), más allá del NIMBY usual. Al dar cuenta que NIMBY (no en mi patio trasero) significa a menudo «no en el patio trasero de una persona blanca», y por tanto «si en el patio trasero de una persona de color o pobre», el movimiento de justicia ambiental ha repetido que «ninguna comunidad debería tener esos venenos industriales y tóxicos». Por desgracia, para muchas comunidades de color ya es demasiado tarde incluso para NIMBY: los vertederos, las incineradoras, las fundiciones de metales, las plantas petroquímicas o las bases militares ya están en su vecindad. La preocupación por la salud de la familia y de la comunidad es el hilo que une a un amplio espectro de activistas en el movimiento de base por la justicia ambiental. Los conflictos contra las industrias contaminantes son de hecho muchas veces batallas para tener más democracia y participación en las decisiones que afectan a la salud y subsistencia humanas. Según Eric Mann, co-director del Centro de Estrategia de Comunidades y Trabajo de Los Angeles, «existe mucha gente no sólo en Los Angeles sino en todo el país que, sin darnos nosotros cuenta, ha llegado a conocer muy bien la amenaza que el poder concentrado de las empresas representa para nuestras esperanzas de democracia política y económica». Las organizaciones que piden justicia ambiental contra las industrias contaminadoras no suelen ser puristas e irrazonables, normalmente (como señalan Austin y Schill) «no quieren que los contaminadores hagan las maletas y se vayan sino que limpien la suciedad que han producido».

Quienes abogan por la justicia ambiental piden responsabilidades públicas a los contaminadores.

CONCLUSIÓN

Al desafiar la blancura del ambientalismo tradicional, el movimiento por la justicia ambiental de Estados Unidos enraizado en las minorías, ha levantado cuestiones muy profundas sobre quién representa a esas comunidades amenazadas por el «racismo ambiental». Los promotores de la justicia ambiental contestan que ellas y ellos son quienes la representan. El movimiento por la justicia ambiental permite comprender los aspectos raciales y étnicos de los temas ambientales y los aspectos ambientales de la justicia social y económica. Al elucidar la relación entre raza y medio ambiente, los promotores de la justicia ambiental demostramos cuán apropiado y eficaz es formar coaliciones, coordinadoras u organizaciones multietnicas de amplia base multirracial y multicultural.

---

66 Schaefer, op. cit. en nota 47, p. 10.